



**SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

Medellín, trece de julio de dos mil veinte

17-223

Proceso:	CONSULTA
Demandante:	LUZ ENID RODRÍGUEZ RESTREPO
Demandado:	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
Radicado No.:	05001-31-05-015-2015-01139-01.
Decisión:	CONFIRMA ABSOLUCIÓN

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, se constituyó en Audiencia Pública en el proceso de la referencia, con el fin de conocer en el grado jurisdiccional de CONSULTA la decisión con la cual el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes de la Sala el proyecto aprobado en el **ACTA 16** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1 LO PRETENDIDO

La señora **LUZ ENID RODRÍGUEZ RESTREPO**, a través de apoderado judicial, demandó a la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**, para que tras declarar la nulidad del dictamen emitido por la entidad se acoja el de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ que le otorgó un porcentaje del 51.53% o en subsidio sea valorada nuevamente su pérdida de capacidad laboral y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que mientras era contratista del SENA haciendo trabajo de campo en varias zonas de Antioquia, comenzó a sentir un dolor lumbar irradiado a la pierna y pérdidas momentáneas de conciencia que fueron aumentado, al punto de que estuvo incapacitada durante largos períodos de tiempo sin poder laborar desde hace más de 3 años. Que fue valorada inicialmente por COLPENSIONES, que la calificó con un 38.75% de pérdida de capacidad laboral; dictamen contra el que se presentó inconformidad siendo valorada por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA que le otorgó un porcentaje del 51.53% de pérdida de capacidad laboral.
- Que ante la apelación de COLPENSIONES fue valorada por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, que sin estudiar a fondo su caso ni revisar la historia clínica posterior a los dictámenes anteriores se le calificó con 10 puntos menos de lo señalado por la Junta Regional, lo que no se compadece con la realidad pues padece LUPUS ERITEMATOSO, FIBROMALGIA Y ALTERACIONES COGNITIVAS, patologías de alta complejidad que le impiden laborar y ejercer su profesión de docente, además de que según los especialistas su estado tiende a empeorar.
- Que es cabeza de familia, tiene a su cargo además de los gastos personales los de su hijo menor de edad y no cuenta con ayuda de terceras personas.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ** se opuso a las pretensiones de la demanda. Respecto a los hechos aceptó como cierto el porcentaje de pérdida de capacidad laboral asignado inicialmente por COLPENSIONES y que el mismo fue apelado por lo que la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ le asignó un porcentaje del 51.35%, el cual partió de un error al calificar el lupus que fue descartado y refutado mediante varias pruebas científicas, así como al evaluar una lesión cerebral inexistente, siendo claro para todos los neuropsicólogos y psiquiatras que evaluaron a la demandante que sus alteraciones en la esfera mental obedecen al trastorno depresivo. Así mismo acepta como cierto el dictamen emitido por dicha entidad, aclarando que no es cierto que no se hayan estudiado a fondo las condiciones de la paciente, sino que, por el contrario, se hizo lo que omitió hacer la Junta Regional, que fue evaluar las evidencias científicas obrantes en la historia clínica que dan cuenta que la actora no presenta lupus ni lesión cerebral. Respecto a los demás hechos señala que no le constan o se trata de aseveraciones de la parte actora que carecen de fundamento.

Mediante sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** que atendiendo al dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la señora **LUZ ENID RODRÍGUEZ RESTREPO** es del **43.52%** con fecha de estructuración del **20 de junio de 2013** y en consecuencia se dejó sin efecto el dictamen No. 43672950 proferido por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ el 13 de enero de 2016..

2. ARGUMENTOS

2.1. ARGUMENTOS DE LA JUEZ

En vista de que la actora presentó inconformidad con el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ que le determinó una pérdida de capacidad laboral del 41.92%, se decretó prueba pericial, siendo evaluada nuevamente por la FACULTAD DE SALUD PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA el 15 de febrero de 2017, donde se le determinó un porcentaje del 43.52%, de conformidad con el manual único de calificación del Decreto 917 de 1999 vigente para la fecha del dictamen inicial y teniendo en cuenta las patologías FIBROMALGIA, DEPRESION MODERADA, TRANSTORNO COGNITIVO LEVE y SINDROME DOLOROSO DE COLUMNA, descartando al momento de la valoración la existencia de LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO ni ningún otro diagnóstico reumatológico, de acuerdo a las pruebas clínicas realizadas a la paciente; dictamen que fue acogido por la a quo ya que el mismo no fue objetado y se realizó conforme a la ley, dejando sin efecto el dictamen de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ, sin que ello signifique que ese organismo se equivocó en su valoración, ya que el estado de salud es cambiante y por tanto revisable.

2.2. CONSULTA

Dentro del término otorgado por la Ley NO se interpuso ningún recurso, debiendo ser conocido el proceso en el grado jurisdiccional de **CONSULTA**, según lo dispuesto el artículo 69 del CPT y SS, ya que la sentencia fue totalmente adversa al demandante.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en determinar si fue acertada la decisión de la a quo de darle valor al dictamen realizado por la Facultad Nacional de Salud Pública y dejar sin efecto el dictamen de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Pretendía la demandante a través del presente proceso controvertir el porcentaje de pérdida de capacidad laboral otorgado por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, con el argumento que en el mismo no se estudió a fondo su historia clínica, ni su verdadero de estado de salud, ya que se le otorgó un porcentaje del 41.93%, inferior al de 51.35% que le había sido asignado inicialmente por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA.

Bajo este contexto y antes de adentrarnos a analizar el tema que comporta objeto de estudio por parte de la Sala, es importante precisar algunos aspectos sobre la competencia para realizar dictámenes mediante los cuales se emite un concepto técnico que, entre otros, determina la merma de capacidad laboral, lo que a su vez permite analizar la viabilidad de las suplicas contenidas en el libelo genitor.

Al respecto vale traer a colación lo dispuesto en el **ARTÍCULO 41 de la Ley 100 de 1993** modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 que reza:

“Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales- ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.”

En este sentido se destaca la importancia que tienen dichos conceptos, dado que en principio constituyen el fundamento para que las entidades que administran el Sistema de Seguridad Social deciden sobre el reconocimiento y pago de determinadas prestaciones económicas a las que podría tener derecho el afiliado, sin que sea admisible, sin fundamento alguno, apartarse de su contenido, incluso un juez no estaría facultado para dictaminar en forma definitiva y **sin el apoyo de**

especialistas en la materia, asuntos tan técnicos como la distribución porcentual que apareja una patología, toda vez que es un hecho que debe ser establecido científicamente, conocimiento que claramente escapa al resorte de las competencias de un operador jurídico.

Ahora, debe aclararse que si bien en la demanda se pretendía inicialmente que se dejará sin efecto el dictamen de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y se acogiera el de la JUNTA REGIONAL que le había determinado un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 51.35%, esto no es posible, dado que como bien lo define el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, a que se hizo referencia, los dictámenes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez son controvertibles ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, lo que significa que el dictamen de la Junta Regional no estaba en firme, dado que COLPENSIONES interpuso recurso de apelación contra el mismo, por lo que no puede simplemente desconocerse el dictamen de la JUNTA NACIONAL que obra como órgano de cierre en la materia y tiene la potestad legal de modificar lo dicho en primera instancia por la JUNTA REGIONAL, como en ocurrió en el caso de autos.

Así las cosas, como el dictamen que emite la Junta Nacional de Calificación de Invalidez como órgano de cierre no tiene ningún recurso, solamente existe la posibilidad de rebatir su contenido dentro de un proceso ordinario laboral, siendo ello la génesis de esta acción, escenario en el que, debiendo mediar razones atendibles, se intenta contrariar los conceptos que sobre el tema hayan emitido los órganos competentes. Por ello, tanto la parte actora como la a quo contaba con la opción de solicitar la realización de una pericia para efectos de analizar por quien fungiría como auxiliar de la justicia, el porcentaje aludido, dado que si un concepto administrativo atara al operador jurídico carecería de sentido la intervención de la jurisdicción laboral, razonamiento plasmado por la Sala de Casación Laboral en sentencias como las de radicación 29.328, reiterada en la 29.622 y 31.062, que al referirse al tema, señaló que por ello es necesario que el fallador, para efectos de definir el estado de invalidez objeto de controversia, acuda al apoyo de un ente especializado en la materia, al no contar con la potestad de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si un trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías.

Y es precisamente la distribución porcentual el asunto sobre el que se edifica esta controversia, dado que la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, le asignó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 41.93% estructurada el 5 de diciembre de 2013 de origen común, en el cual se tuvo en cuenta los diagnósticos **fibromialgia, trastorno depresivo y cambios por espondilosis en columna vertebral**, descartando el **lupus eritematoso sistémico (LES)**, la **espondiloartrosis o proceso vasculítico** y el **proceso disautónomico por cardiología**

Para controvertir el referido dictamen, en audiencia celebrada el 30 de marzo de 2016 se decretó prueba pericial en la cual se remitió a la actora a la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA para que determinara el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Dictamen emitido el 15 de febrero de 2017, visible a folios 220/222, donde se le calificó una pérdida de capacidad laboral del 43.52% de origen común estructurada el 20 de junio de 2013, con base en los diagnósticos: depresión moderada Clase II o trastorno somatomorfo (fibromialgia), síndrome doloroso de columna lumbar y trastorno cognitivo leve y nuevamente se indica que se descartó el (LES) **lupus eritematoso sistémico, dado que no presenta un perfil inmunológico que lo confirme.**

Dicho dictamen se aportó al proceso desde 15 de marzo de 2017, sin que ninguna de las partes presentara controversia, en los términos del artículo 228 del Código General del Proceso.

De ahí que la a quo no tuvo ninguna limitante a la hora de acoger su contenido, pues tal y como ella lo señaló, no contaba con los elementos técnicos para apartarse de las conclusiones dadas por el médico perito, pues no es de resorte del operador jurídico examinar asuntos tan técnicos como este, precisamente se vale de especialistas en la materia para efectos de esclarecer los hechos objetos de controversia. Así lo consagra la ley estatutaria de administración de justicia, Ley 270 de 1996, cuando se refiere a la conformación de las listas de auxiliares como apoyo a los falladores dados sus conocimientos técnicos y científicos, con medios idóneos para la calificación a partir de un grupo interdisciplinario, de ahí que las juntas de calificación no sean las únicas facultadas para emitir dictámenes válidos al interior de un proceso judicial, ni se espere del fallador un análisis médico.

Además se observa que la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia tuvo en cuenta la historia, los exámenes clínicos y diagnósticos practicados a la demandante, enlistó cronológicamente diversos apartes de la historia clínica, relacionó los documentos en los que fundaba la calificación, valoró el diagnóstico motivo de la calificación y describió las deficiencias, discapacidades y minusvalías para determinar el porcentaje total y la fecha de estructuración, sin que encuentre esta Magistratura razones atendibles para desconocer el concepto técnico, pues aunado a ello tampoco se cuenta con los conocimientos técnicos para rebatir las conclusiones a las que llegó el perito respecto al porcentaje de pérdida de capacidad laboral asignado al actor.

Por consiguiente, estima la Sala que fue acertada la decisión de la a quo de acoger el dictamen elaborado por la FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA donde se estableció que la señora LUZ ENID RODRIGUEZ RESTREPO tiene una pérdida de capacidad laboral del 43.62% estructurada el 20 de junio de 2013, el cual guarda coherencia con el dictamen de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ, teniendo solo una pequeña diferencia porcentual de 1.59 a favor de la demandante, dado que ambos se basaron en los mismos

diagnósticos, por lo que se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia revisada en el grado jurisdiccional de CONSULTA.

Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2017 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario promovido por la señora **LUZ ENID RODRÍGUEZ RESTREPO** identificada con c.c. **43.672.950** contra la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará en ESTADOS, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados
(firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por ESTADOS No. 090 fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.
Medellín 14 de JULIO DE 2020

Secretario